



Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

RESOLUCIÓN N° 002567-2023-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA

Expediente : 02559-2023-JUS/TTAIP
Recurrente : **ALBERTO SIDNEY CRESPO PAIVA**
Entidad : **COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DEL PERÚ**
Sumilla : Declara fundado recurso de apelación

Miraflores, 07 de setiembre de 2023

VISTO: El Expediente de Apelación N° 02559-2023-JUS/TTAIP de fecha 01 de agosto de 2023, interpuesto por **ALBERTO SIDNEY CRESPO PAIVA**, contra la denegatoria por silencio administrativo negativo, de la solicitud de acceso a la información pública presentada ante el **COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DEL PERÚ** con fecha 06 de julio de 2023.

I. ANTECEDENTES

El recurrente con fecha 06 de julio de 2023 en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, solicitó a la entidad la siguiente información:

- 1. Me facilite vía correo electrónico la síntesis de todas las actas y/o grabaciones de las sesiones, ordinarias y/o extraordinarias, entre los Decanos Departamentales y el Consejo Nacional del Colegio Médico Veterinario del Perú, realizadas de manera presencial o virtual a partir del mes de octubre del 2022 hasta la fecha de recepción del presente escrito.*
- 2. Me facilite vía electrónico la síntesis de todas las actas y/o grabaciones de las sesiones, ordinarias y/o extraordinarias, del Consejo Nacional del Colegio Médico Veterinario del Perú, realizadas de manera presencial o virtual a partir del mes de octubre del 2022 hasta la fecha de recepción del presente escrito.*

De autos se puede verificar que la entidad no emitió respuesta con respecto a la solicitud, de acceso a la información pública del recurrente.

El 01 de agosto de 2023, el recurrente interpuso ante esta instancia el recurso de apelación materia de análisis.

Mediante la Resolución N° 002365-2023-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA¹ se admitió a trámite el referido recurso impugnatorio, requiriendo la remisión del expediente administrativo generado para la atención de la solicitud impugnada, así como la formulación de sus descargos.

¹ Resolución de fecha 23 de agosto de 2023, la cual fue debidamente notificada a la entidad el día 01 de setiembre de 2023.

Con fecha 07 de septiembre de 2023, la entidad presenta sus descargos en mérito a la solicitud de acceso a la información pública presentada por el recurrente.

II. ANÁLISIS

El numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido, con excepción de aquellas informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

A su vez, el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS², establece que toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones de ley, teniendo las entidades la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley de Transparencia establece que las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control.

Cabe anotar finalmente que, el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de Transparencia, establece que la denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser fundamentada por las excepciones de ley, agregando el primer párrafo del artículo 18 de la referida norma que las excepciones establecidas en los artículos 15, 16 y 17 del mismo texto son los únicos supuestos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretadas de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental.

Adicionalmente a ello, el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Transparencia, aprobado por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM⁸, señala que cuando se denegara el acceso a la información requerida por considerar que no tiene carácter público, las entidades de la Administración Pública deberán hacerlo obligatoriamente en base a razones de hecho y a las excepciones contempladas en la Ley de Transparencia.

2.1 Materia en discusión

De autos se aprecia que la controversia radica en determinar si la entidad debe entregar, conforme a ley, la información solicitada por el recurrente.

2.2 Evaluación de la materia en discusión

Sobre el particular, es criterio de este Tribunal que toda documentación que obra en el archivo o dominio estatal es de carácter público para conocimiento de la ciudadanía por ser de interés general, conforme lo ha subrayado el Tribunal Constitucional en el Fundamento 5 de la sentencia recaída en el Expediente N° 4865-2013-PHD/TC indicando:

“(…)

² En adelante, Ley de Transparencia.

5. *La protección del derecho fundamental de acceso a la información pública no solo es de interés para el titular del derecho, sino también para el propio Estado y para la colectividad en general. Por ello, los pedidos de información pública no deben entenderse vinculados únicamente al interés de cada persona requirente, sino valorados además como manifestación del principio de transparencia en la actividad pública. Este principio de transparencia es, de modo enunciativo, garantía de no arbitrariedad, de actuación lícita y eficiente por parte del Estado, y sirve como mecanismo idóneo de control en manos de los ciudadanos”.*

Al respecto, el artículo 3 de la Ley de Transparencia, que consagra expresamente el Principio de Publicidad, establece que: *“Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por (...) la presente Ley”*. Es decir, establece como regla general la publicidad de la información en poder de las entidades públicas, mientras que el secreto es la excepción.

En esa línea, el Tribunal Constitucional en el Fundamento 8 de la sentencia recaída en el Expediente N° 02814-2008-PHD/TC, ha señalado respecto del mencionado Principio de Publicidad lo siguiente:

- “(…) 8. (...) Esta responsabilidad de los funcionarios viene aparejada entonces con el principio de publicidad, en virtud del cual toda la información producida por el Estado es, prima facie, pública. Tal principio a su vez implica o exige necesariamente la posibilidad de acceder efectivamente a la documentación del Estado”.*

Dentro de ese contexto, las excepciones a la publicidad únicamente se encontrarían previstas en la Ley de Transparencia y por leyes especiales, siempre que expresamente lo dispongan, ya que las normas de excepción o restrictivas de derechos se interpretan de manera restrictiva.

Siendo ello así, corresponde a este colegiado analizar si la entidad dejó de atender la solicitud de acceso a la información pública presentada por el recurrente conforme a lo dispuesto por la Ley de Transparencia.

2.3 Respecto a la información solicitada

El recurrente solicita la siguiente información:

1. *Me facilite vía correo electrónico **la síntesis** de todas las actas y/o grabaciones de las sesiones, ordinarias y/o extraordinarias, entre los Decanos Departamentales y el Consejo Nacional del Colegio Médico Veterinario del Perú, realizadas de manera presencial o virtual a partir del mes de octubre del 2022 hasta la fecha de recepción del presente escrito.*
2. *Me facilite vía electrónico **la síntesis** de todas las actas y/o grabaciones de las sesiones, ordinarias y/o extraordinarias, del Consejo Nacional del Colegio Médico Veterinario del Perú, realizadas de manera presencial o virtual a partir del mes de octubre del 2022 hasta la fecha de recepción del presente escrito.*

Con fecha 07 de septiembre de 2023, la entidad presenta sus descargos señalando que:

*“Manifestamos que actualmente la Solicitud N° 23-2023-ACMV, no cuenta con un expediente administrativo; sin embargo, el área correspondiente del Consejo Nacional del Colegio Médico Veterinario del Perú, **con prontitud se estará dando***

respuesta a los requerimientos solicitados por el Médico Veterinario Alberto Sidney Crespo Paiva que son:

(...)

Sin perjuicio de ello, señalamos que el Consejo Nacional del Colegio Médico Veterinario del Perú, se rige bajo sus normativas internas siendo así que, en el artículo 30° del Reglamento de Sesiones establece lo siguiente:

“Artículo 30°.- Las Actas, son el informe escrito de lo sucedido, tratado y acordado en una Asamblea o Sesión, una vez aprobada y firmada el acta no puede ser alternada. De existir error u omisión, ésta constará en el Acta de la sesión siguiente. Las actas deben constar en el Libro de Actas respectivo debidamente legalizado ante Notario Público.”

Asimismo, el artículo 31° del citado reglamento detalla el contenido que se debe de registrar en las Actas siendo las siguientes:

“Artículo 31.- (...)

a. Fecha, hora y lugar en que se celebra la sesión.

b. Clase de la reunión (Ordinaria, Extraordinaria, etc.)

c. Nombre de los miembros asistente.

d. Aprobación del acta de reunión anterior, si se formulan observaciones, deberán registrarse antes de la firma.

e. Hora de clausura de la Asamblea o Sesión.

Firmas en toda y cada una de las páginas del Acta. De ser de una Asamblea, ésta será firmada por los miembros asistentes del Consejo Nacional, un Decano Departamental y dos miembros delegados.

Las actas de sesión del Consejo serán firmadas por todos los miembros asistentes, pudiendo adherirse los miembros no asistentes.”

En ese sentido, la normatividad interna del CMVP no exige la obligatoriedad de grabar las sesiones. Por ello, sobre la base de lo señalado, se procederá a dar respuesta al solicitante.

*Finalmente, cumpliendo con el principio de transparencia **se está recabando la información necesaria para atente la solicitud**”.* (negrita y resaltado agregado)

De lo anterior se observa que la entidad no ha negado la publicidad de la información, no ha negado su posesión, ni ha alegado causal de excepción alguna que limite su acceso, por lo que la presunción de publicidad que recae sobre dicha información se encuentra plenamente vigente al no haber sido desvirtuada.

En sus descargos la entidad señala que con prontitud se estará dando respuesta a los requerimientos solicitados por el recurrente; de ello se infiere que la entidad no cumplió con entregar la información solicitada; asimismo, señala que su reglamento de sesiones establece no exige la obligatoriedad de grabar las sesiones.

En este punto, es importante citar también el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que dispone:

“Artículo 3.- Principio de publicidad

Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad.

Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta Ley.

En consecuencia:

- 1. Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el artículo 15 de la presente Ley.*
 - 2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la Administración Pública.*
 - 3. El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad.*
- La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información solicitada”. (subrayad y negrita agregado)*

En el Fundamento 9 de la sentencia recaída en el Expediente N° 074402005-PHD, dicho colegiado ha precisado que las entidades están obligadas a entregar la información con la que deba contar, a pesar de no poseerla físicamente:

“(…) 9. (...) es razonable entender que una copia de dicha información obre en sus archivos, pues se trata de información que, por su propia naturaleza y las funciones que cumple, tiene el deber de conservar. Además, estima que, si físicamente no la tuviera puede perfectamente solicitarse o, en su defecto, ordenar su entrega”.
(Subrayado agregado)

En el caso de autos se aprecia que el recurrente **solicita la síntesis** de todas las actas y/o grabaciones de las sesiones ordinarias y/o extraordinarias celebradas entre los Decanos Departamentales y el Consejo Nacional del Colegio Médico Veterinario del Perú y también las actas y/o grabaciones de las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Consejo Nacional del Colegio Médico Veterinario del Perú, realizadas de manera presencial o virtual a partir del mes de octubre del 2022 hasta la fecha de recepción del presente escrito. Ahora bien, como se dijo líneas arriba la entidad no ha negado tener la información solicitada por el recurrente; por el contrario, indica que se está recabando la información necesaria para atender la solicitud (de ello se infiere el incumplimiento). Por lo que se desprende que la información solicitada por el recurrente es de naturaleza pública y por lo tanto es de acceso público; no obstante, dado que en algunos de esos documentos pueden existir datos personales que afecten la intimidad personal y familiar estos deberán tacharse, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 19 de la Ley de Transparencia.

En ese sentido, cabe la posibilidad de que eventualmente la documentación solicitada por el recurrente pueda contar con información protegida por las excepciones contempladas en la Ley de Transparencia. En cuanto a ello, de manera ilustrativa, con relación a la protección de información de naturaleza íntima, el Tribunal Constitucional en los

Fundamentos 6, 7, 8 y 9 de la sentencia recaída en el Expediente N° 04872-2016-PHD/TC, analizó la entrega de la ficha personal de una servidora pública, documento que contiene información de carácter público como son los estudios, especializaciones y capacitaciones realizadas, así como datos de carácter privado, entre otros, los datos de individualización y contacto, siendo posible tachar éstos últimos y de esa forma garantizar el acceso de la información a los ciudadanos, conforme el siguiente texto:

“(…)

6. De autos se advierte que la ficha personal requerida contiene tanto información de carácter privado como información de carácter público. En efecto, mientras que la información de carácter privado se refiere a datos de individualización y contacto del sujeto a quien pertenece la ficha personal; la información de carácter público contenida en el referido documento abarca datos que fueron relevantes para contratarla, tales como el área o sección en la que la persona ha desempeñado funciones en la Administración Pública; la modalidad contractual a través de la cual se le ha contratado; así como los estudios, especializaciones y capacitaciones realizadas.
7. No solamente no existe razón para limitar la entrega de información referida a las cualificaciones relevantes que fueron decisivas para la contratación de un empleado en la Administración Pública, sino que, hacerlo, desincentivar la participación ciudadana en la fiscalización de la idoneidad del personal que ingresa a ella.
8. Al respecto, no puede soslayarse que la ciudadanía tiene interés en contar con personal cualificado en la Administración Pública, por lo que impedirle el acceso a información relativa a las cualidades profesionales que justificaron la contratación del personal que ha ingresado a laborar en dicha Administración Pública, no tiene sentido. En todo caso, la sola existencia de información de carácter privado dentro de un documento donde también existe información de carácter público no justifica de ninguna manera negar, a rajatabla, su difusión.
9. Atendiendo a lo previamente expuesto, es perfectamente posible satisfacer el derecho que tiene la ciudadanía de acceder a la información de carácter público de quienes laboran dentro de la Administración Pública y, al mismo tiempo, proteger la información de carácter privado de dichas personas, tachando lo concerniente, por ejemplo, a los datos de contacto, pues con ello se impide su divulgación. Por consiguiente, corresponde la entrega de lo peticionado, previo pago del costo de reproducción”. (subrayado agregado)

En atención a lo expuesto, cabe destacar que en caso de existir en un documento información pública y privada, esta última debe separarse o tacharse, a fin de facilitar la entrega de la información pública que forma parte del documento, ello acorde con el artículo 19 de la Ley de Transparencia.

En consecuencia, corresponde estimar el recurso de apelación presentado y ordenar a la entidad que proceda a la entrega al recurrente de la información pública requerida³, conforme a los argumentos expuestos en los párrafos precedentes.

Finalmente, de conformidad con los artículos 30 y 35 del Reglamento de la Ley de Transparencia, aprobado por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, en aplicación de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, corresponde a cada entidad determinar la responsabilidad en que eventualmente hubieran incurrido sus funcionarios y/o servidores por la comisión de presuntas conductas infractoras a las normas de transparencia y acceso a la información pública.

³ Salvaguardando, de ser el caso, la información protegida por las excepciones contempladas en la Ley de Transparencia, bajo los parámetros de interpretación restrictiva contemplados en el artículo 18 del mismo cuerpo legal.

Por los considerandos expuestos y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 y en el numeral 1 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses;

SE RESUELVE:

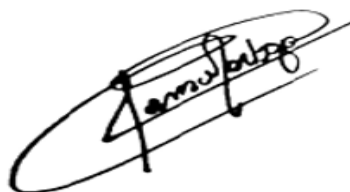
Artículo 1.- DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación presentado por **ALBERTO SIDNEY CRESPO PAIVA**; en consecuencia, **ORDENAR** al **COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DEL PERÚ** que entregue la información solicitada por el recurrente de acuerdo a los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- SOLICITAR al **COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DEL PERÚ** que, en un plazo máximo de (7) días hábiles, acredite el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución respecto a la información solicitada por **ALBERTO SIDNEY CRESPO PAIVA**.

Artículo 3.- DECLARAR agotada la vía administrativa al amparo de lo dispuesto en el artículo 228 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Artículo 4.- DISPONER que la Secretaría Técnica de este Tribunal realice la notificación de la presente resolución al **COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DEL PERÚ** y a **ALBERTO SIDNEY CRESPO PAIVA**, conforme a ley.

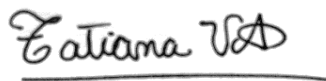
Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional (www.minjus.gob.pe).



ULISES ZAMORA BARBOZA
Vocal Presidente



LUIS AGURTO VILLEGAS
Vocal



TATIANA AZUCENA VALVERDE ALVARADO
Vocal

vp:lav